DEAJALO21-4645

Bogotá D.C, martes, 13 de julio de 2021

Doctora

**OLGA CECILIA HENÁO MARÍN**

Juez Treinta y Cuatro (34) Administrativa de Bogotá – Oralidad

E.S.D.

Referencia: 11001-33-36-034-2020-00022-00.

Medio Control: Reparación Directa

Demandante: Wilson Villamizar Rodríguez y Otros.

Demandado: Nación - Rama Judicial y Otros.

JESÚS GERARDO DAZA TIMANÁ, identificado con la cédula de ciudadanía No.10’539.319 de Popayán, titular de la tarjeta Profesional No.43.870 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el proceso de la referencia, según poder que adjunto, estando dentro del término legal, procedo a contestar la demanda, en los siguientes términos:

**2.- ANTECEDENTES**

De la lectura de la demanda se observa que la mayoría de los hechos de la demanda son parcialmente ciertos, por cuanto constituyen los antecedentes del proceso penal adelantado contra WILSON VILLAMIZAR RODRÍGUEZ por los punibles de: concierto para delinquir con fines de extorsión, secuestro extorsivo agravado y rebelión, radicado con el No. 54001-61-09-535-2008-00582-00 NI. 2012-0676. La Rama Judicial no está de acuerdo con los relacionados con la privación injusta y los perjuicios reclamados. Los hechos más relevantes resumo en los siguientes términos:

En el año 2011 el señor WILSON VILLAMIZAR RODRÍGUEZ fue procesado por la presunta comisión de los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso con concierto para delinquir con fines extorsivos y rebelión. Dicho trámite procesal fue adelantado por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado Adjunto de Cúcuta y mediante sentencia del 4 de marzo de 2013, fue definida su situación jurídica absolviéndolo de dichos cargos, por lo que obtuvo su libertad.

Por estos hechos el aquí demandante instauró acción de reparación directa, radicada con el No. No. 54001-33-33-002-201500298-00, en trámite en el Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta – Oralidad, a la fecha de la radicación de esta nueva demanda, en dicho proceso se fijó como fecha para llevar a cabo audiencia inicial el día 15 de mayo de 2018.

No obstante lo anterior y como lo afirma la parte actora, al asistir a dicha audiencia, el 12 de mayo de 2018, como se expresa en la demanda **a la 5.00 pm**, el aquí demandante fue retenido nuevamente por la Policía Nacional, por existir en su contra una orden de captura vigente, del referido proceso penal que ya se había finiquitado. Lo anterior por cuanto la Fiscalía, ni la Policía habían borrado de la base de datos dicha orden de captura.

Para recobrar su libertad el señor WILSON VILLAMIZAR el 14 de mayo de 2018, interpuso una acción de Habeas Corpus, radicada con el No. 2018-00018, la cual fue fallada NEGATIVAMENTE, por haber desaparecido el motivo que originó esta acción, esto es haber recobrado su libertad dentro del término legal, decisión adoptada por el Juzgado Único Promiscuo de Cubará el día 15 de mayo de 2018, fecha en la cual recobró su libertad. No se allega con la demanda, prueba de que esta decisión haya sido objeto de apelación.

Por estos hechos permaneció privado de la libertad entre el 12 y el 15 de mayo de 2013, es decir, por tres (3) días, por lo que considera que ha sido privado injustamente de su libertad, por lo que reclama perjuicios, materiales y morales en cuantía de $79’902.180.oo.

**3- RAZONES DE LA DEFENSA DE LA RAMA JUDICIAL**

**CADUCIDAD**

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 164, numeral 2, literal i) de la ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone:

*“(...) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia*

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por error judicial, el término de los dos (2) años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que contiene el error alegado.[[1]](#footnote-1)

Con la claridad anterior, y visto el caso que nos ocupa, se tiene que el aquí demandante pretende que se le indemnice por los presuntos perjuicios causados por la presunta privación injusta de su libertad. Así pues, en el caso concreto no puede pasarse por alto que el señor Wilson Villamizar Rodríguez recobró su libertad el día 15 de mayo de 2018, por lo que el término de dos (2) años que trata el artículo 164, literal i) de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A., para presentar la demanda vencía el 16 de mayo de 2020, sin embargo la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 29 de julio de 2020, es decir cuanto ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que la conciliación en este caso, no tuvo la virtud de interrumpir termino alguno.

Es de señalar además, que durante el tiempo de cuarentena decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del Coronavirus Covid 19, para el trámite prejudicial la Procuraduría General de la Nación no suspendió términos, y siguió prestando el servicio para el trámite de conciliación prejudicial de manera virtual. Por consiguiente, no hay razón justificativa para haberla radicado dicho trámite administrativo el 29 de julio de 2020, lo que ratificad la materialización del fenómeno jurídico de la caducidad.

**INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR PARTE DE LA RAMA JUDICIAL**

La Constitución Política de 1991, en su artículo 90 estableció la regla general de responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o por la omisión de las autoridades”. Se trata de una cláusula general de responsabilidad del Estado, cuya estructuración se determina a partir del cumplimiento de dos (2) requisitos:

1. Existencia de un daño antijurídico

2. Que éste sea imputable a la acción u omisión de una autoridad pública.

El Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el daño antijurídico es aquella lesión patrimonial o extrapatrimonial, causada en forma lícita o ilícita, que el perjudicado no está en el deber jurídico de soportar. Éste daño puede tener por fuente una actividad irregular o ilícita, o el ejercicio normal de la función pública que causa lesión a un bien o derecho del particular.

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -Ley 270 de 1996-, reguló la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, por las acciones u omisiones que causen daños antijurídicos, a cuyo efecto determinó tres presupuestos, entre los cuales se encuentra el error jurisdiccional que, según el artículo 66 de la misma ley “*es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley*”, y el artículo 67: *ARTICULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2.La providencia contentiva de error deberá estar en firme.*

La H. Corte Constitucional al realizar el estudio de constitucionalidad de la citada ley, en sentencia C - 037 de 5 de febrero de 19962[[2]](#footnote-2), puntualizó:

(Error jurisdiccional) *“(…) como lo señala la norma, se materializa únicamente a través de una providencia judicial; es decir, cualquier otra actuación de un administrador de justicia, así sea en ejercicio de sus labores públicas, deberá ser evaluada a la luz de la responsabilidad del Estado en los términos de la Constitución y la ley (...).”*

En la misma sentencia afirmó el Alto Tribunal Constitucional:

*“…Debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”. Sobre el particular, la Corte ha establecido:*

*“Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. (*Subrayas propias*).*

El tema también ha sido objeto de estudio por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en diferentes providencias, entre ellas, la sentencia del 22 de noviembre de 20013, en la cual, señaló: *“El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.”*

En cuanto a las diferencias entre error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento, la Corporación precisó:

“*La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:*

*“(…) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño -incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado -si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.*

*En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho. (…)”.*

Tratándose de cancelación de órdenes de captura, en diferentes decisiones de la Corte Constitucional se ha descrito el procedimiento y sobre todo la responsabilidad de quienes están a cargo de mantener y actualizar dicha información. Al respecto ha destacado:

*“3.1.4. De conformidad con el artículo 300 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, se puede ordenar una captura excepcional por parte del Fiscal General de la Nación o su delegado, la cual deberá ser escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva y cuando no se encuentre un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, además de concurrir causales como el riesgo inminente de que la persona se oculte, cuando exista probabilidad fundada de alterar los medios probatorios, o peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible.*

*3.1.5.* ***Ahora bien, en cuanto al registro que deben llevar las autoridades judiciales y administrativas, constituye una obligación de la Fiscalía General de la Nación contar con un sistema central de información, que permita asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, y en especial, la de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.***

*3.1.6. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 261 de 2000, modificado por el artículo 79 de la Ley 938 de 2004,* ***se cuenta con el Centro de Información de Actividades Delictivas*** *el cual, entre otras funciones, tiene la de definir la política de recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte para el desarrollo de las investigaciones que debe adelantar la Fiscalía, así como establecer mecanismos que faciliten la utilización oportuna de la información básica por parte de las Unidades de Policía Judicial****. Uno de estos mecanismos es el registro en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, (SIAN), sistema que se encarga de la recolección, registro, análisis y difusión de la información vigente de órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones o cesaciones de procedimiento por indemnización integral, sentencias condenatorias y absolutorias en firme que profieren las autoridades judiciales. De otra parte, esta entidad tiene el registro del Sistema Penal Acusatorio denominado (SPOA****), que registra los casos por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 2006. El centro de información sobre actividades delictivas, en coordinación con las direcciones de fiscalías, implementará, de manera periódica, la realización de procesos de depuración de la información contenida en la base de datos. Para tal efecto, las autoridades judiciales deben aportar la mayor cantidad de información en los formatos diseñados para la realización de dicha labor.*

*3.1.7. La materialización de la captura no solo está en cabeza de la Fiscalía, sino que* ***además, se trata de una función que le corresponde a la Dirección Central de Policía Judicial -DIJIN****-. La Fiscalía dirige y coordina las funciones de Policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales, de manera transitoria, el Fiscal General les haya atribuido tales funciones.”[[3]](#footnote-3)(*Negrilla no original del texto)

Lo anterior implica que en el caso sub examine se configura una falta de legitimación por pasiva en relación con la Nación – Rama Judicial. Esto por cuando, tal como la misma demandante lo manifestó en su solicitud, el Juzgado Único Promiscuo de Cubará le otorgó la libertad con ocasión de la acción de Habeas Corpus interpuesta.

Aunado a esto, NO es responsabilidad de la Judicatura actualizar y mantener al día los datos sobre órdenes de capturas, medidas de aseguramiento y demás sobre la libertad; sino que dicha función corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a quienes autorice a que se responsabilicen por mantener actualizados los datos sobre capturas en el registro de anotaciones SIAN.

**FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA A FAVOR DE LA RAMA**

En este contexto, en el presente caso se configura la excepción denominada falta de legitimación por pasiva de la Nación – Rama Judicial, pues esta entidad no es la encargada de actualizar y mantener actualizado los registros sobre órdenes de captura. Tal labor corresponde a la Fiscalía y a quienes esta autorice, conforme a la normatividad y jurisprudencia vigente sobre la materia.

**4.- PRUEBAS Y PERJUICIOS**

La parte actora solicita indemnización de perjuicios, morales y a la afectación de los derechos convencionales y constitucionalmente amparados, los constitucionalmente protegidos, los cuales no hay lugar a su reconocimiento, con base en los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuesto.

Por perjuicios morales, reclama el equivalente a 20 smlmv, para él y sus dos (2) padres, no obstante no hay lugar a su reconocimiento por cuanto permaneció privado dentro del término legal, para clarificar su situación jurídica, como lo establece la Constitución Política en el artículo 28.

*“De conformidad con el artículo 28 Superior, la protección judicial de la libertad tiene un contenido doble en el sentido de que, de una parte, por regla general, se requiere mandamiento escrito de autoridad judicial competente para poder detener a una persona y de otra, una vez se produce la detención, la persona deberá ser puesta a disposición del juez competente, en el menor tiempo posible y en todo caso, máximo dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión. (*Sentencia T- Sentencia C-042/18).

Perjuicios por **afectación de los derechos convencionales y constitucionalmente amparados.**

Como quiera que la reparación a estos derechos es dispositiva, siempre que se evidencie que el daño fue antijurídico, que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, para evitar un doble pago y no obstante, estar relacionada con todo abuso o desbordamiento arbitrario del poder público que vulnere los derechos de los asociados y se materialice en daños antijurídicos genera un deber para el Estado de restituir, indemnizar, rehabilitar, satisfacer y adoptar garantías de no repetición, perjuicio en los que es necesario tener en cuenta la Resolución 60/147 del 21 de marzo de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, concerniente a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, la cual ha sido acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, circunstancia que la vuelve jurídicamente vinculante en el ordenamiento interno, sin embargo, en este caso no tiene aplicación.

Por lo anterior, con todo respeto me permito expresar que con base en los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, no hay lugar al reconocimiento de los perjuicios reclamados y se niegue la prosperidad de las pretensiones de la presente demanda.

**Pruebas de la parte demandada**

Respecto a la carga de la prueba el Consejo de Estado, ha expresado:

*“CARGA DE LA PRUEBA - Naturaleza / CARGA DE LA PRUEBA - Regla de conducta del juez / CARGA DE LA PRUEBA - Principio de autorresponsabilidad El concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo.* ***En otros términos, «no existe un deber de probar, pero el no probar significa en la mayoría de los casos la derrota»; las reglas de la carga de la prueba sirven para establecer cuál de las partes tendrá que soportar el resultado desfavorable derivado de una actividad probatoria o de la falta de alegación o de una alegación incompleta, pues aunque el juez no disponga de todos los hechos cuyo conocimiento hubiera resultado necesario para fallar en uno u otro sentido, la prohibición de «non liquet»*** *le obliga a resolver, en todo caso. Es entonces cuando las reglas de la carga de la prueba le indicarán en cabeza de cuál de las partes recaía la obligación de haber acreditado un determinado hecho y, por consiguiente, a quién corresponderá adscribir, en la sentencia, las consecuencias desfavorables derivadas de su no demostración, pues dichas reglas, precisamente, permiten al fallador cumplir con su función de resolver el litigio cuando falta la prueba, sin tener que abstenerse de dirimir, de fondo, la cuestión, para no contrariar, con un pronunciamiento inhibitorio, los principios de economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional.* ***En los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa.***(Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ Bogotá, D.C., febrero cuatro (04) de dos mil diez (2010) Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720) Actor: ULISES MANUEL JULIO FRANCO Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU Y OTROS).

*NOTA DE RELATORIA: Sobre carga de la prueba”,* (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de octubre de 1976, MP. Jorge Valencia Arango; del 30 de junio de 1990, rad. 3510, MP. Antonio J. Irisarri Restrepo y del 16 de 2007, MP. Ruth Stella Correa Palacio; rad. 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG)).

Revisado el acápite de pruebas de la demanda, no se evidencia que la parte actora haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 173 del código General del Proceso, esto es, acreditar que radicó memorial solicitándola, razón por la cual, la oportunidad para solicitar la prueba documental, se encuentra precluida.

No obstante lo anterior, la Rama Judicial remitió el Oficio No. DEAJALO21-4674 del 14 de julio de 2021 solicitando copia de todo el trámite del Habeas Corpus.

**5.- ANEXOS**

1.- Copia de la Resolución No. 5393 del 16 de agosto de 2017, por medio de la cual el Director Ejecutivo delega la función de Representación Judicial de la Nación - Rama Judicial en la Directora Administrativa de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal y Copia de la Resolución No. 7361 del 3 de noviembre de 2016 mediante la cual se nombra en propiedad a la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE como Directora Administrativa de la División de Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial y Acta de posesión del 30 de noviembre de 2016.

**6.- NOTIFICACIONES**

Ministerio Público: Procuradora Judicial 82 Administrativa I, Dra. Ana María Córdoba Ruíz. correo: amcordoba@procuraduría.gov.co.

Apoderado parte actora: abogado Yedison Fabian Pérez López, correo: yfperezlopez@gmail.com. Celular: 316-2338861, 310-5717252.

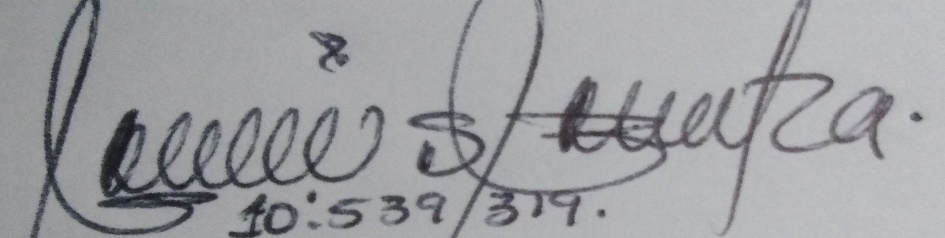
Fiscalía General de la Nación, en la Diagonal 22 B No. 52-01, Bogotá, teléfono (57- 5702000 ext. 2003, 2004, correo: Dirección electrónica: [jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co](mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co).

Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en el Comando Central de la Entidad, correo: [decun.notificacion@policia.gov.co](mailto:decun.notificacion@policia.gov.co), notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co y segen.tac@policia.gov.co.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la Calle 70 No. 4-60 en la ciudad de Bogotá, PBX (57-1)2558955, correo: buzoniudicial@defensaiuridica.gov.co

Las personales las recibiré en la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Calle 72 No.7 - 96 Piso 8º. Tel. 3127011 Ext. 705661 de Bogotá D.C. o en el buzón electrónico de notificaciones: Correo electrónico: [notifdeaj@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:notifdeaj@deaj.ramajudicial.gov.co) o al mi correo institucional: [jdazat@deaj,ramajudicial.gov.co](mailto:jbuitram@deaj,ramajudicial.gov.co) Celular: 320-4685184.

De la Señora Juez,



**JESÚS GERARDO DAZA TIMANÁ**

C.C. No 10’539.319 de Popayán.

T.P. No 43.870 del C. S. de la J.

Correo: [jdazat@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:jdazat@deaj.ramajudicial.gov.co)

Cel: 320-4685184.

1. Sentencia 2009-00191/44523 del 23 de agosto de 2017 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejera Ponente: Dra. Marta Nubia Velásquez Rico Rad.: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia C - 037 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

   3 H. Consejo de Estado, Sección Tercera. M.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164). [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Constitucional. Sentencia T- 531 de 2016. M. P. Dr.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [↑](#footnote-ref-3)